

una serie de Reales Decretos de los años 30 y 31 relativos a la Comunidad israelita, un Decreto de 1961 de reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia Evangélica Luterana en Italia y, finalmente, la ley de 11 de agosto de 1984 que regula las relaciones entre el Estado y las iglesias representadas por la Mesa Valdense.

La teórica vigencia de las normas anteriores a la Constitución se encuentra muy matizada, como señalan los autores en numerosas notas, por la legislación posterior y, sobre todo, por la doctrina de la Corte Constitucional.

En las obras de este género es práctica frecuente aludir también, con notable extensión, a las normas civiles que disciplinan el matrimonio. La relación que en un país como Italia guardan estas normas con el Derecho eclesiástico y la importancia misma de la materia, justifican plenamente, según mi parecer, la opción de Berlingò y Casuscelli de incluir en la compilación esas normas civiles que vienen a constituir la parte tercera del volumen.

La cuarta lleva por título «ordinamento giuridico italiano e fattore religioso». En una nota explicativa los autores señalan que se ofrece «una esposizione ragionate, insieme con i richiami legislativi di maggior rilievo, della più significative norme unilaterali — estranee alla materia dei 'rapporti' dello Stato con le Confessioni religiose ed a quella matrimoniale, e per tanto non

incluse nelle parti precedenti— della cui legittimità la Corte Costituzionale ha giudicato nelle pronunzie emanate del 1957 ad oggi».

El repertorio de normas incluidas en esta parte cuarta no tiene, ni de lejos, pretensión de exhaustividad, sino que recoge aquellas que pueden considerarse básicas. El carácter reducido con que se presente esta edición y el anuncio adelantado por los autores del más completo «Código de derecho eclesiástico» en preparación, advierten de los límites naturales de este volumen.

He aludido en varias ocasiones a las abundantes referencias que se encuentran en el «Código» a la doctrina de la Corte Constitucional. Es conocido el importante papel desempeñado por el Tribunal en orden a la adaptación de la antigua legislación italiana, en gran medida no derogada formalmente, a los nuevos principios constitucionales. En Apéndice se recogen los pronunciamientos —más de cincuenta entre los años 1957 y 1985— de la Corte Constitucional en materia eclesiástica. Conviene advertir que sólo se recogen los datos básicos de identificación de la Sentencia u Ordenanza, la referencia a los temas y normas aludidas y el fallo del Tribunal, sin transcripción alguna, por tanto, de los fundamentos jurídicos.

Al índice general de la obra se añade, finalmente, un índice cronológico de las fuentes, desde 1924 hasta 1985.

JORGE DE OTADUY

Valerio Tozzi, *Assistenza religiosa e Diritto ecclesiastico*, Casa Editrice Eugenio Jovene, Napoli 1985, pp. 235.

En este libro —publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nápoles—, el Autor se propone analizar

los modos específicos de intervención de la administración pública en las actividades referidas al fenómeno religioso

so, para valorar su conformidad con los principios generales que presiden la materia del Derecho eclesiástico. Cobra especial interés este estudio después de los nuevos acuerdos entre el gobierno italiano y la Santa Sede (de 18 de febrero de 1984) y las comunidades valdense y metodista (de 21 de febrero de 1984), y las discusiones con la comunidad israelita.

Se pretende que la nueva normativa tenga valor constitucional en el ordenamiento jurídico del Estado italiano, conforme al artículo 13 de los acuerdos del 18 de febrero de 1948 (cfr. a este respecto, la recensión del libro de A. Gómez de Ayala, *Il «soggetto» nella nuova codificazione canonica; Qualificazione dell'Accordo fra Stato e S. Sede. Spunti e suggerimenti*, en «Ius Canonicum» XXVI (1986), pp. 406-408). Pero debe tenerse en cuenta que las relaciones entre la Iglesia y el Estado se sitúan a niveles muy variados: Santa Sede, Conferencia episcopal italiana, Conferencias episcopales regionales, Obispos, por un lado; Estado, Regiones, municipios, etc. por otro lado.

La Constitución italiana da un tratamiento diferenciado al fenómeno religioso. Desde un punto de vista muy general, éste está considerado en el ámbito de las experiencias del espíritu, en vistas al pleno desarrollo de la persona humana, consideradas como derechos y deberes, o sea como «interés público general, constitucionalmente cualificado». Otras normas lo toman en cuenta en relación con aspectos específicos de concretas experiencias de los fieles con comunidades de fieles, en cuyo caso se trata del «interés, individual o colectivo, privado, de parte». Esta concepción permite superar la tradicional reivindicación de la libertad religiosa en contra de las ingerencias de la autoridad estatal, en favor de una concepción

de la libertad religiosa ya no contrapuesta, sino incluida —con otras expresiones superiores del espíritu humano— entre los «bienes de civilización» que permiten actuar el progreso espiritual de la sociedad.

Mientras los acuerdos de Letrán sólo regulaban la asistencia espiritual a las fuerzas armadas, el acuerdo concordatario alcanza a las principales instituciones de asistencia religiosa: fuerzas armadas, régimen penitenciario, servicio de sanidad nacional, que el Autor estudia sucesivamente en las distintas normas legislativas.

En las fuerzas armadas, se mantiene la presencia eclesiástica en base a los compromisos que derivan del Concordato de Letrán. En cuanto a las instituciones penitenciales, no existe semejante vínculo concordatario y el mismo origen de la institución de la asistencia religiosa ni preveía la confusión entre los poderes de la organización confesional y aquellos de la administración pública. Dicha confusión es más bien el fruto de un principio legislativo en materia eclesiástica caracterizado por la compenetración entre estructuras organizativas propias a la Iglesia y a la administración estatal. Se puede decir otro tanto del sector sanitario.

La decisión normativa sobre la posibilidad o no de encargar a las distintas confesiones los servicios de asistencia religiosa en las instituciones pertinentes a la administración pública es de la competencia exclusiva del legislador civil y puede ser asumida tanto a nivel central como a nivel regional.

Por lo tanto, la organización centralizada de las fuerzas armadas y de la administración penitenciaria requerirían necesariamente la intervención del legislador central, mientras que la organización sanitaria podría admitir que la decisión la tomase el legislador regio-

nal, según la competencia de las Regiones en materia de bienestar público.

Ahora bien, la disciplina de la organización del servicio —en cuanto a su estructura intrínseca— se presenta como propia de la esfera de competencia exclusiva de los ordenamientos confesionales: tendría que ser sancionada por éstas, a través de los órganos que detienen la necesaria jurisdicción en esos mismos ordenamientos.

En toda esta materia, sería procedente garantizar la imparcialidad del funcionamiento de la administración pública, sin discriminación entre las diversas confesiones. La actual regulación de la asistencia religiosa resulta inadecuada, según Tozzi, para satisfacer correctamente las exigencias religiosas de la población católica y además no es

conforme con los principios de igualdad de los ciudadanos y de igual libertad de las confesiones religiosas, ya que la legislación sigue marcada por la «teoría cuantitativa» que tiene en cuenta «la relevancia que ha tenido la Iglesia católica en razón de la antigüedad, de la tradición ininterrumpida del pueblo italiano que a ella pertenece en su casi-totalidad» (Decisión de la Corte constitucional en materia eclesiástica, de 1957).

La situación actual presenta auténticos vicios de constitucionalidad en la normativa referente a las instituciones aquí examinadas. V. Tozzi auspicia que la aplicación del Concordato —todavía por hacer— permita subsanar estos vicios.

DOMINIQUE LE TOURNEAU

## METODOLOGIA JURIDICA

Eutimio SASTRE SANTOS, *Metodologia giuridica*, Institutum Iuridicum Claretianum, Roma 1985, 196 págs.

El hecho de confluir en una misma persona la docencia de la Historia del Derecho y de Metodología y de la investigación jurídica, son dos buenos avales del interés que el libro, cuyo autor, profesor de la Universidad Urbaniana, ostenta. Y su producción científica, en el área de la investigación histórica, añade a los anteriores un nuevo argumento.

No se trata, por consiguiente, de una construcción teórica, de laboratorio: es el fruto, por el contrario, de tantas horas de labor investigadora, y de experiencia directa en la transmisión del

método a nuevos investigadores. A todo ello hay que añadir el que se trata de una metodología específicamente nacida en el área del Derecho Canónico, lo que sin duda la hace especialmente apreciable para el ámbito jurídico.

El libro se divide en lo que podríamos considerar las clásicas tres partes que componen el trabajo de investigación; más marcadas, si cabe, para el alumno que prepara su primer trabajo de investigación sería (la tesis doctoral), y que es justamente el inmediato destinatario de esta *Metodologia giuridica*: la elección del tema, la recogida